



SENTENCIA DEFINITIVA.-TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS.- JUZGADO QUINTO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA.-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a veinticinco de mayo del año dos mil veintitrés.

VISTOS.- Para resolver los autos del expediente número **1293/2022**, relativo al **Juicio de Divorcio Incausado**, promovido por **** * por propio derecho, en contra de **** * **** * **** * **** *; y,

R E S U L T A N D O

1.- Por escrito recibido el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, compareció ante este órgano jurisdiccional **** * **** *, por propio derecho, a promover Juicio de Divorcio Incausado, en contra de **** * **** * **** * **** *; fundándose en sus hechos que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidos conforme a la letra. A su escrito anexó los documentos base de su acción y citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso.

2.- En acuerdo de fecha veintitrés de noviembre del dos mil veintidós, se hizo del conocimiento a las partes de los medios alternativos de solución de controversias, se dió entrada a la demanda en la vía y forma propuesta; por lo que hace a las medidas provisionales ordenadas en el ordinal 271 del Código Civil vigente, se dejó de hacer pronunciamiento hasta en tanto obre la contestación de la demanda; ordenándose emplazar a la demandada por exhorto dirigido al Juzgado Civil del Distrito Judicial de **** * Chiapas, para que dentro del término de nueve días, contestara la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo, perdería el derecho que dentro de él debió ejercitar, señalándose fecha y hora para la celebración de la Junta

de Conciliación, dándose vista a la Fiscal del Ministerio Público adscrita para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su Representación Social correspondiera, previniendo al promovente que exhibiera propuesta de convenio; autorizándose el domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós, se corrió la vista a la Fiscal del Ministerio Público adscrita.

3.- En mandato del trece de marzo de dos mil veintitrés, se proveyó el oficio número 245-C/2023, de fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de ***** Chiapas; en el cual se tuvo por devuelto debidamente diligenciado el cuadernillo de exhorto número 013/2023-E, en el cual obra diligencia de emplazamiento de fecha tres de febrero de dos mil veintitrés, mediante cédula de notificación; quién al no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra en auto de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se le tuvo por precluído el derecho que dentro de éste debió ejercitar, ordenándose efectuar las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por los estrados de este Juzgado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 615 del Código Procesal Civil del Estado; señalándose fecha y hora para la celebración de la Junta de Conciliación, dando vista a la Fiscal del Ministerio Público adscrita para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su Representación Social correspondiera. Con fecha veintinueve de marzo del año dos mil veintitrés, se corrió la vista a la Fiscal del Ministerio Público adscrita.

4.- En diligencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia de conciliación, con la asistencia del consorte y la Fiscal del Ministerio Público adscrita, en donde ratificó su deseo de



divorciarse y realizó sus manifestaciones respectivas; por lo que, en términos del artículo 655 Quater, párrafo III del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó traer los autos a la vista de la juzgadora, para el dictado de la resolución respectiva, misma que hoy se pronuncia; y,

CONSIDERANDO

I.- Que este Juzgado es competente para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 145, 146 y 158 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; y 76 fracción IV del Código de Organización del Poder Judicial del Estado.

II.- Que atento al artículo 79 de la Ley Adjetiva Civil, sentencia definitiva es la resolución que pone fin a un juicio principal, y, en congruencia con ese dispositivo el numeral 81 de la propia Ley establece que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo a la demandada y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

III.- Que en la especie, compareció ante éste órgano Jurisdiccional **** * por propio derecho, a promover Juicio de Divorcio Incausado, en contra de **** * reclamando como prestaciones:

*“A).- La disolución del vínculo matrimonial que hasta el día de hoy me une a la C. **** * el cual fue celebrado el día **** *. B).- El pago de gastos y costas que se generen por la tramitación del presente juicio al momento en que se dicte sentencia se aprueben todas las cláusulas del convenio que se anexa.” (Sic)*

Argumentando esencialmente el accionante como hechos, *que contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal; que durante su matrimonio procrearon a su hijo e hijas de nombres ***** *** *****; que durante la vigencia de su matrimonio no adquirieron ningún bien mueble e inmueble que sea sujeto de liquidación; que desde hace aproximadamente treinta años se encuentra separado de su cónyuge; manifestando que es su voluntad dar por terminado el vínculo matrimonial que lo une a la demandada, solicitando el divorcio, anexando propuesta de convenio.*

El actor para demostrar su acción, exhibió como anexos: copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre ***** y ***** y *****; así como, la copia certificada de los atestados de nacimiento de los cónyuges divorciantes, y las copias certificadas de los atestes de nacimiento de su hijo e hijas *****; quienes cuentan con la edad de cuarenta, treinta y nueve, treinta y siete y treinta y tres años, respectivamente.

Por su parte, la demandada ***** ***, ***** *****, al no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra, en proveído del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se le tuvo por precluído su derecho que dentro de éste debió ejercitar; ordenándose efectuar las subsecuentes notificaciones, y aún las de carácter personal por los estrados de este Juzgado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 615 del Código Procesal Civil del Estado.



IV.- Bajo ese orden de ideas, acorde a las constancias procesales de autos, que merecen valor legal de conformidad con el numeral 400 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se procede al estudio del sumario en los términos siguientes:

Entrando al estudio de la cuestión planteada, se itera que el matrimonio es de orden público y que el Estado está interesado en su preservación para constituir el origen de la familia, misma que es la base de la sociedad, siendo permisible su rompimiento en casos particulares; para lo cual nuestra legislación Procesal Civil vigente en el Estado, en su título décimo tercero, refiere que para ello se podrá ejercer, ya sea de manera incausada o por mutuo consentimiento; señalando el diverso 262 del Código Civil del Estado, que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro; el divorcio puede ser incausado cuando cualquiera de los cónyuges lo solicite ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin necesidad de señalar la razón que lo motiva; debiendo para ello, cumplirse con los requisitos que enumera el diverso 268 bis; y con el convenio que establece del numeral 269 del citado cuerpo de leyes; y con el trámite que enumera los normativos legales 652 bis, 652, ter, 652 quater, 655, 655 bis, 655 ter, 655 quater y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas; divorcio unilateral, que es el que hace valer el actor **** *; y el que fue tramitado en sus fases procesales respectivas; el cual además, para su mejor comprensión se atiende a lo que establece el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, objeto de reforma el día diez (10) de junio del año dos mil once (2011), que a la letra dice:

“... Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.- Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas...”

Texto constitucional, que a la luz de su correcta y sana interpretación, al establecer la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; obliga a esa ponderación de la protección máxima a esos derechos humanos; tal como lo ha realizado el más alto Tribunal del País, estableciendo una adecuada intelección de la normativa constitucional de que se trata, indicando que dentro de ello, deben las autoridades, respetar dentro de esos derechos fundamentales el derecho al libre desarrollo de la personalidad humana, que se deriva de la dignidad humana, como derecho fundamental superior; y el cual comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; así como, la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, ese derecho de decidir autónomamente el proyecto de vida solo es inherente a esa persona; y en esa medida, es que la autoridad que conozca del juicio debe advertir que ya no existe la



voluntad de al menos una de las partes para seguir unido en matrimonio y debe tenerla en cuenta, para determinar lo que mejor les conviene, tomando en consideración su derecho fundamental a la dignidad humana; y, basado en ello, decretar el divorcio; lo anterior, sin dejar de soslayar la existencia del derecho a que la ley proteja siempre la organización y el desarrollo de la familia, como base de la sociedad; en términos del primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Federal; sin que ello conlleve a que el Estado, deba mantener a toda costa unidos en matrimonio a los consortes aún en contra de su voluntad, so pretexto de esta disposición constitucional; sino que, debe buscar los medios o instrumentos adecuados para evitar su desintegración; sin afectar los derechos humanos que le son inherentes a cada uno de sus integrantes, como lo es la conciliación que los haga retomar el proyecto de vida de familia; y en caso de no lograrse a pesar de haberse hecho uso de esa herramienta es que el Estado debe ponderar la voluntad de la persona; y no obligarlo a continuar unido en matrimonio, cuando no exista voluntad de hacerlo; más aún cuando, se trate de matrimonios en donde las partes lleven tiempo separados y tengan ya nuevos proyectos de vida; dado que con ello, es evidente la ausencia de todos los fines del matrimonio y los beneficios de los consortes al seguir casados; lo que debe ponderarse, ya que de no ser así, implicará el desconocimiento de una situación de hecho existente e incluso propiciará el desgaste en las relaciones entre sus integrantes, y limitaría ese ponderado derecho al libre desarrollo de la personalidad; y por consiguiente, la dignidad humana de los consortes.

Corolario a ello, es que para decretar el divorcio, debe atenderse a esa expresa voluntad de una sola de las partes; y de que ninguna de las partes desee una reconciliación; y que ese matrimonio ya no tiene beneficios sociales, ni personales para sus miembros; ello en ponderación al artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que señala que, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales; lo anterior, atento a la jurisprudencia que ha emitido nuestro más alto Tribunal en su epígrafe reza:

“... DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.- ASPECTOS QUE COMPRENDE.- De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida.- Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.- Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, solo a ella corresponde decidir autónomamente.”¹

Por lo que, partiendo de lo reseñado, es que el ejercicio del derecho humano a contraer matrimonio de manera libre y voluntaria no puede, por ningún motivo, conllevar la privación o restricción de otro derecho; ya que, como se dijo, el referido desarrollo de la personalidad, está reconocido en los tratados internacionales, de los que México es parte, e implícitamente en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, conforme a los cuales se puede concluir que esa decisión de divorcio es una vertiente del principio fundamental del "libre desarrollo de la personalidad"; puesto que ello garantiza a los ciudadanos la libertad de elegir pareja e incluso, cónyuge asegurando que cada persona libremente

¹ Jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional de nuestra República Mexicana, cuyo rubro, texto y síntesis informa: “[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Pág. 7



proyecte su vida en la forma que lo desee hacer, ya sea casarse o no, y de hacerlo elegir de forma libre y autónoma a la persona con quien desea trazar su proyecto de vida; esto, atendiendo a diversas cualidades de mayor o menor significado para cada individuo. Dicho de otro modo, todas las personas tienen el derecho fundamental de elegir libremente a la persona con la que compartirán su vida y la manera en que la desarrollarán, pues sería constitucionalmente inválido que una legislación o el Estado, impusieran a las personas un modelo de pareja o de cónyuge, estableciendo restricciones innecesarias para la libre elección de consorte; pues se estima que ésa es una decisión personalísima que atañe únicamente al individuo, quien será el que, atendiendo a su proyecto de vida, a la manera y el modo en que ha determinado lograr éste, decida las características que su cónyuge debe tener; puesto que ello también tiene inmersos diversos elementos tanto objetivos como subjetivos, los que únicamente pueden ser valorados y calificados por cada individuo; al gozar de autonomía personal propia que permite advertir las características con las que debe contar una persona para tomar la trascendente decisión de contraer matrimonio o vivir en alguna de las formas reguladas por la legislación civil; en lo cual se resalta, el Estado está imposibilitado, para tener injerencia alguna; ya que de ser así, sería tanto como violar la individualidad de las personas y su derecho a que sean éstas quienes elijan de manera libre y autónoma su proyecto de vida; y la manera y las personas con las que lo logrará; de ahí que, nuestro más alto Tribunal ha concluido que decidir con quién casarse, es una decisión que goza de una protección de rango constitucional; que debe de ser promovido, protegido, respetado y garantizado por todas las autoridades mexicanas en términos del artículo primero constitucional.

En igual manera y en armonía a lo anterior, orienta lo citado el siguiente criterio:

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONSTITUYE UNA FORMA DE EJERCER EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. En el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, la cual no está supeditada a explicación alguna, sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente. Así, dicha manifestación constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida.”²

Decisión que además, va en concordancia a lo que señala el artículo 23³ del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce por un lado que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; así como, que toda persona puede contraer matrimonio y formar su propia familia; pero el cual debe hacerse con la voluntad de contraerlo y con la persona que se desea hacerlo; por lo que, a contrario Sensu, en una ponderación a los normativos apuntados en líneas que antecede; es que se arribe a decir que el matrimonio, no puede continuar si falta la voluntad o el consentimiento de uno de los consortes para seguir unido en esa relación, puesto que la celebración de ese acto, de ningún modo implica que sus integrantes pierdan el derecho a decidir libremente el desarrollo de su personalidad y el estado civil en que desee estar, como garantía de la dignidad humana; es decir, el matrimonio no tiene como fin conllevar la privación o restricción de otro -disolver el vínculo matrimonial cuando así lo desee-; ya que se sustenta en el mismo principio, que es la voluntad de

² Tesis 1a.LIX/2015, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, emitidos por la Primera Sala, Décima Época, Libro 15, febrero de 2015, Tomo I Página 570.

³ La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. 3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.



Divorcio para el cual, el actor exhibió copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre ***** y *****

** ** ***** ** ***** ***** ***** ***** ***** **
 ***** ** ***** ***** ***** ** ***** ***** ***** **, así
 como, la copia certificada de los atestados de nacimiento de los cónyuges
 divorciantes, y las copias certificadas de los atestes de nacimiento de su
 hijo e hijas ***** ***** ***** *****; quienes cuentan con la
 edad de cuarenta, treinta y nueve, treinta y siete y treinta y tres años,
 respectivamente; documentos que merecen valor legal al tenor de los
 artículos 334 fracción IV y 398 del Código Procesal Civil del Estado, en
 relación a los diversos 39, 46 y 355 del Código Civil del Estado; y
 justifican la petición del actor en la vía y forma que lo intenta.

V.- Corolario a lo anterior, y siendo ponderativa la voluntad del actor
 de no seguir unido en matrimonio con la accionada, como parte de su libre
 desarrollo de la personalidad; tomando en cuenta las particularidades del
 caso a estudiar y considerando la ausencia de los fines de las disposiciones
 contempladas en el Título Quinto, Capítulo X, de la Ley Sustantiva Civil
 vigente en el Estado, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1º y
 4º Constitucional, en igualdad de género, que establece la igualdad de
 condiciones, sin distinción y derecho a igual protección de la ley; **se
 declara la disolución del vínculo matrimonial** que une a ***** **
 ***** ***** ***** y ***** ***** ***** , ***** ** ***** **
 ***** ***** ** ***** ***** ***** ** ***** ** *****
 ***** ***** * ***** ***** ***** ** ** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** . Recobrando ambos
 cónyuges su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio, conforme
 lo establece el artículo 287 del Código Sustantivo Civil vigente.



De conformidad con el numeral 194⁴ del Código Civil vigente en la Entidad, se declara disuelta la sociedad conyugal, dejando a salvo el derecho de las partes para que en caso de existir bienes, lo liquiden en el incidente respectivo.

VI.- Ahora bien, respecto al derecho alimentario compensatorio de ***** ***, por el tiempo que duró su matrimonio, y que tiene su fundamento legal en este caso por el régimen contraído por las partes, en los numerales 277⁵ y 298 Bis⁶ del Código Civil del Estado de Chiapas; y toda vez que no acudió a la junta de conciliación de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitres, se le deja a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía y forma que corresponda.

VII.- Con relación a su hijo e hijas de nombres ***** ***, quienes son mayores de edad; se deja de hacer decretamiento alguno, dado que cuentan con la edad de cuarenta, treinta y nueve, treinta y siete y treinta y tres años, respectivamente; por ende, atento a los ordinales 636⁷ y 637⁸ del Código Civil del Estado, tienen la libre disposición de sus bienes y personas.

VIII.- Por las particularidades del presente asunto, se deja de exhortar a las partes lo señalado en el normativo 655 Quinques, párrafo segundo⁹ del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Chiapas.

⁴ Art. 194.- La sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por voluntad de los consortes, por la sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente y en los casos previstos en el artículo 185.

⁵ Art. 277.- En la sentencia de divorcio incausado el juez declarará que, de no existir convenio entre los progenitores ni sentencia firme que defina respecto de la custodia y convivencia en relación a sus hijos menores o incapaces, quedan obligados para con estos y cualquier cuestión al respecto, podrá ejercitarse a través de la vía incidental o en juicio autónomo según las circunstancias del caso, a fin de que el juez resuelva lo conducente en los términos de este código y el código de procedimientos civiles para el estado.

⁶ Art. 298 Bis.- Los cónyuges o los concubinos que demanden el pago de alimentos con el argumento de que se dedicaron preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, tienen a su favor la presunción de necesitarlos y tendrán derecho a una pensión compensatoria por el mismo lapso que duro el matrimonio o el concubinato o hasta en tanto se encuentren en posibilidades de proporcionarse a sí (sic) mimos (sic) los medios necesarios para su subsistencia y mientras no contraigan nuevo matrimonio o se unan en concubinato.

⁷ Art. 636.- La mayor edad comienza a los 18 años cumplidos.

⁸ Art. 637.- El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes.

⁹ Art. 655 quinqués.- ...las resoluciones que se dicten con motivo de las consecuencias jurídicas del divorcio incausado deberán contener la exhortación a las partes para que acudan a la aplicación de la mediación o la conciliación, previo a la vía judicial, para

IX.- Con fundamento en los artículos 655 quinquies y 658 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; por conducto de la actuaria judicial, notifíquese la presente sentencia a las partes, y hecho que sea, la misma causara ejecutoria por ministerio de ley. Asimismo previo pago de derechos, identificación y razón de recibo que se deje en autos los interesados para constancia, remítase copia certificada de la misma, a la **Oficialía ***** ****; para los efectos de los numerales 87 del Código Sustantivo del Estado de Chiapas.

No se hace condena en costas, por cuanto no se actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE:

PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente el Juicio de Divorcio Incausado, promovido por **** * por propio derecho, en contra de **** * , en el cual el actor acreditó los hechos constitutivos de su acción y la accionada no dió contestación a la demanda.

SEGUNDO.- Se declara la disolución del vínculo matrimonial
que une a ***** y *****,

*****. Recobrando

la solución, interpretación, cumplimiento forzoso o modificación de alguna de las consecuencias jurídicas del divorcio incausado, esto último cuando las circunstancias hubieren cambiado sustancialmente ante el juez que conoció para su aprobación.



ambos cónyuges su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio, conforme lo establece el artículo 287 del Código Sustantivo Civil vigente.

TERCERO.- De conformidad con el numeral 194 del Código Civil vigente en la Entidad, se declara disuelta la sociedad conyugal, dejando a salvo el derecho de las partes para que en caso de existir bienes, lo liquiden en el incidente respectivo.

CUARTO.- Por los motivos expuestos en el considerando VI del presente fallo, se deja a salvo el derecho alimentario compensatorio de la demandada ***** ***, para que lo haga valer en la vía y forma que corresponda.

QUINTO.- Por las consideraciones expuestas en el considerando VII, se deja de hacer decretamiento alguno en relación a su hijo e hijas de nombres ***** ***, respectivamente; toda vez que son mayores de edad

SEXTO.- Por las particularidades del presente asunto, se deja de exhortar a las partes lo señalado en el normativo 655 Quinques, párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Chiapas.

SÉPTIMO.- Con fundamento en los artículos 655 quinques y 658 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; por conducto de la actuaria judicial, notifíquese la presente sentencia a las partes, y hecho que sea, la misma causara ejecutoria por ministerio de ley. Asimismo previo pago de derechos, identificación y razón de recibo que se deje en autos los interesados para constancia, remítase copia certificada de la

misma, a la **Oficialía ***** ****; para los efectos de los numerales 87 del Código Sustantivo del Estado de Chiapas.

OCTAVO.- No se hace condena en costas, por cuanto no se actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas.

NOVENO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Así definitivamente lo resolvió, mandó y firma la Licenciada **GRACIELA ALCAZAR CASTAÑÓN**, Jueza Quinto de lo Familiar de este Distrito Judicial; ante la fe de la licenciada **CLAUDIA HERNANDEZ PEREZ**, Primera Secretaria de Acuerdos con quien actúa y da fe. DOY FE. J^{GAC}/Ld

ELIMINADO: 41 elementos. FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo de la constitución política de los Estado Unidos Mexicanos; 3 de la Constitución Política del estado libre y Soberano de Chiapas; 100, 106 fracción III, 107 y 116 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 134, 139, y 140 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; 4 fracción II, 12 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas; Séptimo fracción III y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. **MOTIVO:** se trata de información confidencial concerniente a datos personales identificativos.